

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL

Soacha, Cund., Catorce (14) de julio del año dos mil veintidós (2022)

Proceso	Acción de Tutela
Exped. No.	257544003002-2022-0060
Accionante	Luis Fernando Zambrano Vallejo en calidad de Personero Delegado para la Justicia del Municipio de Soacha - Cund.
Accionado	Representante Legal del Conjunto Residencial "Cerezo"
Asunto	Fallo en primera instancia

El Dr. **LUIS FERNANDO ZAMBRANO VALLEJO en calidad de Personero Delegado para la Justicia del Municipio de Soacha**, incoó el trámite constitucional de la referencia invocando su derecho fundamental de petición, señalado en la Constitución Política de Colombia.

1.1. Hechos

En resumen, señaló el accionante que mediante derecho de petición radicado el pasado 2 de mayo de 2022 con el consecutivo interno de esa delegada PMS - DJ- No.189-55 a los correos electrónicos conjuntocerezo2021@gmail.com, crcerezoph@hotmail.com y cerezo@gmail.com, solicitó a la administradora del Conjunto Residencial Cerezo, señora Natalia Cortés, copia del reglamento interno de la copropiedad y lo atinente a la asignación de los parqueaderos, y asignaciones para personas de población especial.

Señaló, que el 9 de mayo de 2022 la señora María Helena Rodríguez, manifestó que mediante oficio de 30 de abril de 2022 le "*desasignaron el parqueadero comunal*" al vehículo de su propiedad con placa VDO-520; y que, por lo anterior, el 9 de mayo de 2022, bajo solicitud con consecutivo PMS-DJ-No.208-22, pidió a la señora Natalia Cortés, mediante mensaje al correo electrónico conjuntocerezo2021@gmail.com, la suspensión de lo manifestado en el oficio de 30 de abril de 2022, hasta tanto no se diera respuesta a la petición suscrita del 2 de mayo de 2022.

Agregó, que en vista de no recibir respuesta después de 30 días hábiles, envió nuevamente comunicación a la parte accionada, el 16 de junio de 2002, bajo el radicado PMD-DJ- No. 303-22, sin obtener respuesta alguna a su petición.



Por lo anterior, solicitó que, a través de un fallo de tutela, se ordene a la copropiedad accionada dar respuesta al derecho de petición radicado el 2 de mayo de 2022.

1.2. Actuación procesal

La acción fue instaurada el **30 de junio de 2022** y asignada por reparto; y admitida con auto del **1 de Julio de 2022**, en el que se ordenó la notificación a las partes accionante y accionada.

El(La) **representante legal de la copropiedad accionada**, guardó silencio ante el requerimiento efectuado por el Juzgado, a pesar de haber sido notificada en debida y legal forma por la Secretaría del Despacho.

CONSIDERACIONES

En su artículo 86, la Constitución Nacional consagró un instrumento para que las personas puedan reclamar del Estado, en forma preferente y sumaria, la protección inmediata de los derechos fundamentales consagrados en ella, cuando quiera que sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en determinadas eventualidades.

Se trata de una acción subsidiaria y eventualmente accesoria, toda vez que sólo es procedente en ausencia de cualquier mecanismo ordinario para salvaguardar tales derechos "*...salvo que (...) se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable*", lo cual tiene desarrollo en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 que especifica los eventos de improcedencia.

En repetidas ocasiones se ha dicho que el **derecho de petición** no se satisface con la simple habilitación de oportunidades para formular solicitudes respetuosas a las autoridades públicas o particulares, sino que es necesario, además, que brinden una respuesta oportuna al interesado -bien sea negativa o positiva-, la cual debe recaer sobre el mérito del asunto al que se refiere el respectivo requerimiento (C. Pol., art. 23).

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la idoneidad de la respuesta depende de que se satisfagan los siguientes requisitos: *i) Oportunidad ii) Deba existir resolución de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y iii) Deba darse a conocer al peticionario*¹. Por lo

¹ Sent. T-260 de mayo de 1997. Cfme: sentss T-12 de 1992, T-419 de 1992, T-172 de 1993, T-306 de 1993, T-335 de 1993, T-571 de 1993, T-279 de 1994, T-414 de 1995, T-529 de 1995, T-604 de 1995, T-614 de 1995, SU-166 de 1999, T-307 de 1999, entre otras.



tanto, si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

El máximo Tribunal Constitucional jurisprudencialmente ha dicho en sentencia T-094 de 2016, que:

"... una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea; y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta."

Por su parte, la **Ley 1755 de junio 30 de 2015**, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que:

"Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. *Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. *Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto".*

..."

Respecto de la **acción de tutela en materia de derecho de petición ante particulares**, la H. Corte Constitucional en Sentencia T-487 de 2017, ha establecido que:

"La procedencia de la acción de tutela en contra de particulares fue dispuesta en el inciso final del artículo 86 de la Constitución, de acuerdo con el cual "La ley



establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión". La ley a la que se refiere el enunciado es el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 42 enumera nueve modalidades de la acción de tutela contra particulares.

También son aplicables en este caso, los artículos 32 y 33 de la Ley 1755 de 2015 Estatutaria sobre derecho de petición, que establecen los casos de procedencia del derecho de petición ante particulares, y por extensión, la procedencia de la acción de tutela en aquellos eventos en los que los particulares requeridos incurran en la violación del derecho de petición, resultando necesario acudir a la jurisdicción constitucional de tutela".

La **presunción de veracidad en materia de acción de tutela** es determinada por la H. Corte Constitucional en Sentencia T-138 de 2014 de la siguiente manera:

"El artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 establece la presunción de veracidad en los siguientes términos: "Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa."

Así, el funcionario judicial puede decretar el restablecimiento del derecho, si cuenta con cualquier medio de prueba del que se deduzca la evidente amenaza o violación de un derecho. De otra parte, el juez debe presumir la veracidad de los hechos narrados en la tutela, si la autoridad o entidad accionada no responde el requerimiento efectuado al momento de adelantarse la acción.

Al respecto, en sentencia T-214 de marzo 28 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, esta corporación explicó que "la presunción de veracidad fue concebida como un instrumento para sancionar el desinterés o negligencia de la entidad pública o particular contra quien se ha interpuesto la demanda de tutela, en aquellos eventos en los que el juez de la acción requiere informaciones y las entidades o empresas no las rinden dentro del plazo respectivo, buscando de esa manera que el trámite constitucional siga su curso, sin verse supeditado a la respuesta de las entidades referidas".

2.5. Problema Jurídico y Caso Concreto

Puede establecerse la procedibilidad de la acción de tutela en el presente asunto, pues al ser procedente el derecho de petición contra particulares en virtud de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 1755 de 2015, por extensión es procedente la acción de tutela cuando aquellos particulares incurran en la vulneración del derecho de petición.

Decantado lo anterior, corresponde al Despacho establecer si la **representante legal del Conjunto Residencial Cerezo** ha vulnerado o puesto en peligro el



derecho fundamental de petición del accionante, al no contestar derecho de petición radicado el pasado 2 de mayo de 2022.

Al respecto, se encuentra acreditado dentro del expediente lo siguiente:

El 2 de mayo de 2022, el accionante radicó mediante correo electrónico, un derecho de petición ante la parte accionada como Personero Delegado de Justicia, ante la solicitud realizada en la Personería Municipal por la señora MARIA HELENA RODRÍGUEZ HERRERA, en el que solicitó:

"... se envié copia del reglamento interno del conjunto, lo atinente a asignación de parqueaderos y igualmente se informe las excepciones que se puedan tener por su administración respecto de dichas asignaciones para con las personas vulnerables que pertenezcan a la tercera edad, cuente con problemas de salud, se encuentren en condición de discapacidad, sean madres gestantes y/o lactantes, madres cabeza de familia etc."

Aunado a lo anterior, el día 9 de mayo de 2022, el accionante envió una nueva comunicación a la copropiedad accionada con el fin pedir la suspensión de la desasignación de parqueadero a la señora MARÍA HELENA RODRÍGUEZ HERRERA, hasta tanto se recibiera respuesta al derecho de petición presentado inicialmente.

Al transcurrir los días establecidos por la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, sin recibir respuesta alguna por parte de la **ADMINISTRACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL CEREZO**, el accionante se vio avocado a interponer la acción de tutela de la referencia.

Y aun cuando se notificó en legal forma al representante legal de la copropiedad accionada sobre la admisión de la presente acción de tutela con el oficio No. 1375 del 01 de julio de 2022, esta guardó silencio ante el requerimiento efectuado por el Despacho, siendo consecuente aplicar la presunción de veracidad contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, teniendo por ciertos los hechos afirmados por el accionante en su escrito petitorio de amparo y que fueron debidamente acreditados dentro del presente trámite constitucional.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos fácticos, con apoyo en la jurisprudencia constitucional y la normatividad señalada, resulta evidente para este Juez Constitucional la vulneración al derecho fundamental de petición del accionante por parte del representante legal del Conjunto Residencial Cerezo y/o quien haga sus veces, toda vez que, el petente tiene derecho a recibir una respuesta *"...clara, precisa, oportuna, completa y de fondo"* a su solicitud, sin que



desde luego conlleve al receptor de la misma una obligación de resolverla de forma positiva o negativa, pues debe pronunciarse dentro de los límites circunstanciales que rodeen su caso particular.

Así las cosas, con el fin de salvaguardar el derecho fundamental de petición de la parte actora, habrá de concederse el amparo constitucional solicitado en lo que tiene que ver con este punto, y ordenarse al(a) **REPRESENTANTE LEGAL DEL CONJUNTO RESIDENCIAL CEREZO y/o quien haga sus veces**, para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la notificación del presente fallo, proceda a dar respuesta de manera clara y precisa, y en lo posible de fondo, al derecho de petición radicado allí por el tutelante el 2 de mayo de 2022, a través de correo electrónico, y le notifique en debida forma la respuesta brindada de conformidad a lo anterior.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Soacha-Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER LA TUTELA AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN solicitado por el Dr. **Luis Fernando Zambrano Vallejo** en calidad de Personero Delegado para la Justicia, al ser vulnerado por el **representante legal del Conjunto Residencial Cerezo**.

SEGUNDO: ORDENAR al(a) **representante legal del Conjunto Residencial "Cerezo"** y/o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, si no lo ha hecho, **CONTESTE** de manera clara, precisa, completa y de fondo, el derecho de petición radicado por el accionante el 2 de mayo de 2022, y le **NOTIFIQUE** en debida forma la respuesta brindada de conformidad.

TERCERO: NOTIFÍQUESE de esta decisión a las partes.

CUARTO: En el evento de que no sea impugnada esta decisión, para su eventual revisión remítase la actuación a la Honorable Corte Constitucional.



Notifíquese y cúmplase.

EL Juez,

RAFAEL NÚÑEZ ARIAS

Firmado Por:

Rafael Nunez Arias

Juez Municipal

Juzgado Municipal

Civil 002

Soacha - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b4903a7e8f3e8b1568c08451f00ddbdcffd2d4a51b7cedf8124e8f726b8d490**

Documento generado en 14/07/2022 10:02:05 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>